

Causa: RUC 1910059482-2 / RIT 396-2023

Delitos imputados: apremios ilegítimos / tortura y lesiones.

Acusado: Tomás Pablo Rodríguez Soriano, RUN 15.384.153-5, chileno, 41 años, casado, capitán de Carabineros, domiciliado en Los tres Antonios N°377 departamento 93, comuna de Ñuñoa.

Fiscal Jaime Retamal Herrera.

Abogados querellantes INDH Paulina Pérez Zapata y Marcela Prieto Bravo.

Abogados querellantes por la víctima Karinna Fernández Neira, Valentina Gatica Bravo y Camila Treimun.

Defensores privados Marco Aguilar Hermosilla, David Inostroza, Mauricio Correa Illesca y Cristián Martínez Soto.

Jueces Erick Aravena Ibarra, Valeria Vega Sepúlveda y Cristián Soto Galdames.

Decisión de condena como autor de delito de apremios ilegítimos.

En Santiago a diecisiete de abril de dos mil veinticuatro.

Esta sala del 4° Tribunal Oral de Santiago, entre los días 2 al 11 de abril del presente año, conoció el siguiente caso:

Acusación del Ministerio Público y del INDH:

Preámbulo. Mediante Circular N°1.832 de 1° de marzo de 2019, vigente al 18 de octubre de 2019, la Dirección General de Carabineros actualizó instrucciones sobre uso de la fuerza, destinando el capítulo IV a regular lo que se denomina el uso diferenciado y gradual de la fuerza.

De ese modo, se reconocían a esa fecha 5 niveles resistencia de una persona controlada, los que a su vez tienen 5 niveles de fuerza permitidos con intensidad progresiva y cuyo objetivo es vencer la resistencia o repeler la amenaza.

El armamento menos letal, se reservaba a la época de los hechos, para el nivel de resistencia 4 esto es el de agresión activa.

Mediante Orden General N°2.635 de 1 de marzo de 2019, vigente al 18 de octubre de 2019, carabineros aprobó el nuevo texto de los protocolos para el mantenimiento del orden público, los que fueron publicados en el D.O. de 4 de marzo de 2019.

Dicha normativa (conforme el texto vigente al 18 de octubre de 2019), prevé una distinción, a propósito de la intervención de Carabineros, entre manifestaciones lícitas e ilícitas, y a su vez, dentro de estas últimas, 2 subcategorías: manifestaciones ilícitas violentas y manifestaciones ilícitas agresivas.

Las manifestaciones Ilícitas son violentas cuando se desatiende las instrucciones de la autoridad policial, y se afectan derechos de terceros, como por ejemplo la libre circulación vehicular, en tanto que se tornan agresivas cuando se generan daños, o se agrede intencionalmente a personas, incluyendo personal policial.

En este texto, a propósito del uso de las armas, se regula la escopeta antidisturbios con munición menos letal, sea esta última con cartucho de impacto (super sock) o cartucho con perdigón de goma, reservándose su utilización de manera exclusiva para el control de muchedumbres e individuos violentos.

Se señala en la ya mencionada regulación, que su uso debe ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, y cuando el empleo de otros elementos sea insuficiente, o cuando esté en riesgo la integridad de terceros, de los propios manifestantes o de Carabineros, y en todo caso, bajo circunstancias constitutivas de los niveles de resistencia 4 o 5 conforme la circular N°1.832 ya aludida, (todo con arreglo al texto vigente al 18 de octubre de 2019).

A su vez, solo pueden hacer uso de la escopeta antidisturbios funcionarios debidamente certificados.

Hechos. El imputado Tomás Pablo Rodríguez Soriano, es capitán de Carabineros y al día viernes 18 de octubre de 2019, se desempeñaba en la Prefectura de fuerzas especiales de Santiago, encontrándose de servicio.

Alrededor de las 19:53 horas, junto al carro lanza aguas LA-017 y en el Vehículo Táctico J-027 encontrándose a cargo de este último, arriba a la intersección de calle Doctor Ramón Corvalán Melgarejo con Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, esquina sur poniente, por la calzada sur de alameda conforme el sentido del tránsito (esto es de poniente a oriente), en la comuna de Santiago.

En dicha intersección permanecía un grupo de manifestantes, quienes se ubicaban sobre la calzada de alameda, entorpeciendo el tránsito vehicular, el que, sin embargo, fluía por las restantes pistas tanto por Avenida Libertador Bernardo O'Higgins hasta Ramón Corvalán, como por calle Irene Morales y Ramón Corvalán (en este último caso de Norte a Sur).

La víctima María Paz Grandjean Cárdenas, es actriz, y el día 18 de octubre de 2019 se encontraba en dependencias de Centro Cultural Gabriela Mistral (Ubicado en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°227) para participar en razón de su profesión en un montaje teatral cuya función principiaba a las 20:00 horas. Por decisión de la administración del referido centro, la función fue cancelada, motivo por el cuál, alrededor de las 19:45 horas, hace abandono del recinto, dirigiéndose a pie hasta la intersección ya referida para tomar locomoción colectiva y dirigirse a su domicilio.

El trayecto lo realiza por calle Alameda (vereda sur), llegando a la esquina de Ramón Corvalán alrededor de las 19:55 horas, pasando por el

costado del personal policial, cruzando la calzada de Ramón Corvalán y situándose en la vereda sur oriente de la mencionada intersección desde dónde baja a la calzada y se mantiene en movimiento observando a Carabineros e increpándolos verbalmente por su accionar.

Junto a los vehículos policiales, en particular delante de ellos, sobre la calzada de la alameda y en el área que intercepta con Ramón Corvalán se mantienen de infantería, un grupo de funcionarios de carabineros de dotación de la (a ese entonces) 28° y 40° Comisaría de FF.EE., premunidos de casco y uniforme táctico, además de portar uno de ellos una escopeta lanza gases, y el imputado González soriano una escopeta antidisturbios marca Hatsan modelo Escort para munición calibre 12.

Encontrándose la víctima en la posición indicada, visible para el imputado, a rostro descubierto, se suscita la siguiente secuencia de actos todos, un par de minutos después y alrededor de las 19:57 horas:

1. El funcionario que porta la carabina lanza gases, que resulta ser don Milton Soto Escobar, hace uso de la misma, con dirección al oriente, lanzando una bomba lacrimógena hacia el suelo de la calzada sur de la alameda.

2. De forma inmediata un manifestante lanza objetos contundentes a los funcionarios de Carabineros, sin darles alcance o lesionarlos. Como respuesta, el imputado Rodríguez Soriano, hace uso de la escopeta antidisturbios provocando la huida del agresor del lugar.

3. Tras el disparo, un segundo manifestante cruza la calzada de la alameda de norte a sur, y encontrándose este de espaldas a carabineros y delante de doña María Paz Grandjean, ambos son apuntados por el imputado con la escopeta que portaba, directamente al tercio superior de su cuerpo, momento en el cuál Tomás Pablo Rodríguez Soriano, abusando de su función, realiza un disparo con la referida arma de fuego, percutiendo un cartucho calibre 12 tipo super sock, el que impacta a la víctima en su pómulo derecho, provocando que se desestabilizara producto del golpe y del dolor, llevando sus manos al rostro y siendo auxiliada por transeúntes.

Durante todo este tiempo vehículos particulares circulaban de norte a sur por Irene Morales hasta Doctor Corvalán.

En el sector dónde se ubicaba la víctima no había manifestaciones violentas ni muchedumbre, ni otras personas a su alrededor.

La distancia existente entre el imputado y María Paz Grandjean Cárdenas es de 16,24 metros.

En el momento en que se ejecuta el disparo aludido por parte del imputado no existía riesgo alguno para la integridad de Carabineros, de transeúntes o cualquier otro tercero, en los términos descritos en el preámbulo precedente.

Cabe mencionar que carabineros no prestó auxilio a la afectada, y ni la concurrencia a la esquina en que ocurren los hechos, ni el uso del armamento son registrados en los libros de novedades del dispositivo.

María Paz Grandjean Cárdenas, resultó con lesiones en su rostro consistentes en Trauma maxilofacial; hematoma malar y mandibular derecho; contusión meseterina, y herida en la región mandibular derecha de carácter menos grave.

Calificación jurídica. Un delito consumado de apremios ilegítimos del artículo 150 d) del Código Penal, en los que el acusado es autor directo conforme el artículo 15 N°1 del Código Penal.

Circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal: Atenuante del numeral 6 del artículo 11 del Código Penal.

Penas solicitadas: 3 años de presidio mayor en su grado medio, accesorias del artículo 29 del Código Penal y costas.

La acusación particular de la víctima.

Se describe los mismos hechos con las siguientes diferencias:

1. Número y acciones de los manifestantes:

- Menciona a un solo manifestante masculino que "intenta agredir" a Carabineros lanzando un objeto sin alcanzarlos, frente a lo cual el imputado dispara y provoca su huida. Posteriormente, señala que "un segundo individuo" cruza la calzada de espaldas a Carabineros.

2. Posición de la víctima y visibilidad para el imputado:

- Agrega que la víctima "interactuaba verbalmente" con Carabineros, siendo la única mujer en el lugar. Enfatiza que el imputado tenía una "visión completa de ella" y que la víctima se encontraba "de frente al imputado" al momento del disparo.

3. Puntería del disparo a la víctima:

- Precisa que el imputado apuntó con su escopeta "directamente al tercio superior de su cuerpo, específicamente a la cara", impactándola en el pómulo.

4. Circulación vehicular:

- Señala que "durante todo este tiempo vehículos particulares y de locomoción colectiva circulaban de norte a sur por Irene Morales hasta Doctor Corvalán".

Las diferencias fundamentales con la acusación de la fiscalía están en la calificación jurídica de los hechos. Se postula un delito consumado de tortura, previsto y sancionado en el artículo 150 a del Código Penal, en concurso ideal con el delito consumado de lesiones simplemente graves, previsto y sancionado en el artículo 397 N°2 del Código Penal y dos delitos de disparo injustificado, previsto y sancionado en el artículo 14 D, inciso 4°, del Decreto 400 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°17.798 sobre Control de Armas en relación al artículo 2 letra b) del mismo cuerpo normativo.

Participación. En calidad de autor, conforme al artículo 15 N°1 del Código Penal.

Modificadorias de responsabilidad penal. Atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal; y agravantes del artículo 12 N°10 y 11 del Código Penal, esto es, "cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia" y "ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad", respectivamente.

Pena solicitada. Por el delito consumado de tortura en concurso ideal con el delito consumado de lesiones simplemente graves la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Por los dos delitos consumados de disparo injustificado la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

Defensa.

En su alegato de apertura la defensa del acusado anticipa que no va a controvertir la ocurrencia de los hechos ni la participación de su representado, pero sí la calificación jurídica formulada por los acusadores.

Sitúa el contexto en que se enmarca la actuación de Carabineros el 18 de octubre de 2019, en medio de una grave alteración del orden público con incidentes violentos, evasiones masivas en el Metro y quema de estaciones, ante lo cual pesaba sobre la institución el deber de restablecimiento de la seguridad.

Plantea que durante ese día el acusado lideró un dispositivo de control del orden público que debió intervenir en varios focos de desórdenes, siendo destinado al sector de Plaza Baquedano tras dispersarse manifestantes mediante el uso de carros lanza aguas. Sin embargo, algunos manifestantes habrían continuado lanzando objetos contundentes contra el personal policial. En esas circunstancias, un funcionario habría utilizado primero una escopeta lanza-gases, siendo agredido luego por un sujeto con polerón blanco que se encontraba detrás de un árbol, ante lo cual Rodríguez habría efectuado dos

disparos con escopeta antidisturbios para repeler el ataque y detenerlo, impactando accidentalmente a la víctima que se encontraba en la línea de fuego.

Esgrime que su representado no pudo prever ni aceptar la posibilidad de causarle a la víctima las lesiones, sino que actuó con mera imprudencia o falta de cuidado. Por ende, la calificación jurídica que mejor se ajustaría a los hechos sería la del cuasidelito de lesiones menos graves, y no el delito de apremios ilegítimos como plantea la Fiscalía, menos aún el de tortura como pretende la querella, pues no existiría dolo ni la intención de infligir un castigo o grave sufrimiento a la víctima.

Declaración del imputado.

Tomás Rodríguez relató que su ingreso a la institución se produjo el año 2007, cuando entró en calidad de aspirante a la Escuela de Carabineros. Tras dos años de estudios, en 2009 egresó con el grado de Subteniente, siendo destinado en los años siguientes a diversas unidades operativas. Preciso que, dentro de su carrera funcionaria, destacaba especialmente su paso por la Prefectura de Fuerzas Especiales.

Fue justamente en esa unidad donde Rodríguez señaló que tuvo la oportunidad de desempeñarse como capacitador de otros funcionarios policiales en el uso de las escopetas antidisturbios. Según detalló, estos cursos tenían una extensión aproximada de dos semanas, contemplando tanto una etapa teórica con evaluaciones de contenidos, como una parte práctica. Esta última, afirmó, se enfocaba en instruir a los alumnos sobre el manejo del arma, las técnicas para su ensamblaje y desarme, y la realización de ejercicios de tiro para constatar en terreno los efectos de cada disparo.

Sin embargo, el oficial también manifestó que, si bien pertenecía a una unidad especializada en materias de control de orden público, e incluso había sido instructor en algunas de estas técnicas, ello no implicaba que contara con la calificación formal de "especialista" en dichas áreas. Esa denominación, según explicó, estaba reservada para aquellos funcionarios que cumplían con una serie de requisitos y cursos adicionales que él no poseía (armero artificiero).

Ahondó en su capacitación específica con el tipo de armamento que utilizó el día de los hechos investigados. Detalló que entre sus antecedentes académicos se contaba un curso para capacitadores de escopeta antidisturbios que había realizado algunos años atrás. Se trataba, señaló, de un entrenamiento dirigido específicamente a oficiales de Carabineros, con una duración de tres semanas. El programa de estudios incluía una parte teórica,

una de práctica con ejercicios de tiro, e incluso algunas materias relativas al respeto de los Derechos Humanos en contextos del uso de la fuerza por parte de la policía.

Respecto a su experiencia con escopetas, el capitán aseguró que al momento de los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019 contaba con la certificación institucional vigente para el uso de este tipo de armas, obtenida a través de cursos de capacitación realizados en los años 2017 y 2019. Cada uno de estos cursos, según recordó, tuvo una duración cercana a una semana completa.

Aseguró que la totalidad de su entrenamiento previo con escopetas antidisturbios estuvo enfocado específicamente en el uso de cartuchos con perdigones de goma, y no así con la munición "Super Sock" que le fue entregada para ser usada en los operativos del 18 de octubre en Plaza Baquedano. Según remarcó, respecto a este nuevo tipo de cartuchos no recibió ninguna capacitación especial ni se le instruyó sobre sus características técnicas o su comportamiento balístico una vez disparados.

El oficial precisó que como parte de su trabajo en Fuerzas Especiales le correspondió asumir por algunos años el cargo de Jefe de Operaciones de dicha prefectura. Pero que se trataba de un puesto más bien administrativo que operativo, centrado en labores de gestión del recurso humano y logístico necesario para el funcionamiento de la unidad, y no tanto en el despliegue en las calles.

Respecto de los hechos propiamente tales, indicó que el 18 de octubre de 2019 se encontraba de servicio en la Prefectura de Fuerzas Especiales, a cargo del dispositivo Ariete 3, compuesto por un jeep blindado donde él se desplazaba junto a dos cabos que actuaban como conductor y acompañante, un bus con personal de otra sección y un carro lanza aguas.

Según su relato, la jornada comenzó alrededor de las 5:30 AM. A las 7:20 AM se desplegaron en el sector de Providencia por una actividad del Presidente de la República, la cual se desarrolló pacíficamente, siendo retirados del lugar cerca de las 9:15 AM. Posteriormente, alrededor de las 9:50 AM, se dirigieron al Estadio Monumental por un evento del club Colo-Colo llamado "Banderazo", actividad que también se llevó a cabo sin incidentes.

Luego de ir a almorzar y recargar equipamiento en la 28° Comisaría, recibieron una instrucción telefónica del comandante Claudio Crespo de acudir al metro Los Héroes para apoyar al personal que trabajaba en contener una manifestación que generaba destrozos y saqueos en la estación, con el fin de resguardar el traslado de detenidos.

Estando aún en Los Héroes, se les informó por radio de una situación más grave en el metro Las Parcelas, donde encapuchados realizaban destrozos y robos, cortando el tránsito. Rodríguez ordenó a su equipo dirigirse a Maipú para evaluar la situación.

Al llegar a Maipú, fueron recibidos con objetos contundentes y bombas incendiarias lanzadas por una gran cantidad de encapuchados que intentaban destruir los vehículos y agredir a los policías. Rodríguez ordenó a su personal descender y detener a los manifestantes más violentos, mientras el carro lanza aguas los dispersaba.

Controlada la situación en Maipú, debieron acudir rápidamente a Plaza Baquedano por una alerta de graves desmanes, específicamente en la Alameda con Ramón Corvalán, donde manifestantes agredían a transeúntes y conductores. El incidente más grave fue el violento atropello de un manifestante por parte de un conductor que intentaba huir.

Cuando se dirigían por calle Rancagua hacia Plaza Baquedano, se toparon con encapuchados que incendiaban un bus del Transantiago. Al llegar, los sujetos atacaron los vehículos policiales con bombas incendiarias y objetos contundentes. El carro lanza aguas poco pudo hacer para controlar el siniestro.

Retomando el camino por la Alameda, al pasar por el GAM un grupo que se manifestaba pacíficamente reaccionó con violencia ante su presencia, lanzándoles piedras y proyectiles.

En Ramón Corvalán decidieron detenerse al ver que personal de Fuerzas Especiales era atacado, mientras dos escolares se interponían pacíficamente entre los vehículos policiales. Rodríguez decidió descender para tener una mejor apreciación de la situación. En ese momento recibió el impacto de una piedra en su casco, obligándolo a bajar el visor. Los ataques arreciaban, pasando objetos sobre la cabeza de los escolares. El cabo Soto usó una carabina lanza gases para dispersar a los manifestantes.

Según Rodríguez, cuando el cabo Soto se dio la vuelta para retirarse, un encapuchado con polerón blanco aprovechó de lanzar una piedra contra el policía quien de espaldas contaba con mucho menos protección. Ante esto, disparó su escopeta antidisturbios contra el atacante, apuntando al tercio inferior para reducirlo *“y sin perder la posición de tiro y preparando de manera inmediata nuevamente efectuó un disparo hacia estas personas con la finalidad de poder reducir a esta persona (sic) y lógicamente detenerla.”*

Admitió que, sin que él se percatara en medio del caos, ese segundo disparo impactó a una tercera persona que se encontraba en la línea de tiro, y que era María Paz Grandjean, la víctima de los hechos investigados. Señaló

que en ese instante no se enteró que la mujer había resultado herida, pues nadie se acercó a alertarlos, sin perjuicio de indicar, tras contrastarlo con una declaración previa que previo a realizar el segundo disparo hizo contacto visual con María Paz, pero solo por un instante. Luego del incidente, se mantuvieron en Plaza Baquedano hasta las 3 AM, cuando se les ordenó replegarse.

Meses después, durante el proceso judicial, pudo ver videos de lo ocurrido y darse cuenta de que su disparo había alcanzado accidentalmente a Grandjean.

Rodríguez entregó antecedentes sobre la escopeta antidisturbios que portaba, explicando que era un arma "de ánima lisa", sin estrías interiores en el cañón, lo que la hacía menos precisa que un arma "de ánima rayada". Agregó que la munición "Super Sock" que les entregaron esa noche no pasó por un proceso de instrucción sobre sus características y comportamiento balístico.

Durante el interrogatorio, el capitán Tomás Rodríguez fue confrontado con diversos medios de prueba que le llevaron a entregar nuevos detalles sobre su versión de los hechos.

Se le exhibió el video captado por cámaras de seguridad en el lugar de los incidentes. Rodríguez afirmó que correspondía a las mismas imágenes que él ya había revisado con anterioridad durante la investigación.

Mientras el video era reproducido, el oficial fue describiendo lo que se observaba en la pantalla. Comenzó identificando la intersección de las calles Doctor Corvalán y Alameda, enfocándose en la calzada sur de esta última. Luego, hizo notar la presencia del carro lanza aguas de Fuerzas Especiales en la esquina inferior izquierda de la toma, junto al vehículo policial en el que él se transportaba.

Rodríguez se reconoció a sí mismo en el video como el funcionario que aparecía inicialmente en un segundo plano, detrás de un semáforo, sosteniendo una escopeta antidisturbios en su mano derecha y un aparato de comunicación radial en la izquierda. También identificó a su acompañante, el cabo primero Milton Soto Escobar, quien se encontraba en una posición similar portando una carabina lanza gases.

A medida que el video avanzaba el capitán fue entregando más detalles. Mencionó que se apreciaba a un grupo de personas en las veredas que los increpaban verbalmente y les lanzaban objetos, ante lo cual el carro lanza aguas activaba chorros cortos a modo de advertencia. También hizo hincapié en la presencia de dos estudiantes en medio de la calzada, junto al semáforo, quienes aparentemente buscaban interrumpir el tráfico vehicular.

El oficial puso especial énfasis en dos momentos que a su juicio resultaron clave. El primero, cuando una piedra lanzada desde atrás de la línea policial impactó a uno de los carabineros, haciendo que un grupo de efectivos avanzara hacia los manifestantes para detener al agresor. Y el segundo, cuando un individuo con capucha blanca lanza una piedra aprovechando que el cabo Soto le daba la espalda. Esto último, según declaró, fue lo que gatilló su reacción de efectuar dos disparos con la escopeta antidisturbios.

Reconoció además el momento exacto en que realizó el segundo disparo, inmediatamente después de aparecer en las imágenes recargando su arma tras el primer tiro.

Se consultó a Rodríguez sobre el libro de novedades de su unidad policial, (exhibición documento N°10), donde se supone que se registra cada procedimiento realizado y el uso de armamento. El capitán indicó que ese tipo de registros debe ser llevado por cada dispositivo de Fuerzas Especiales, pero argumentó que la gran cantidad de hechos que debieron cubrir esa noche hacía imposible consignar cada detalle, por lo que muchas anotaciones se hicieron de manera genérica para poder continuar con el trabajo en terreno.

Admitió que el libro consignaba la concurrencia de su equipo al metro Las Parcelas, detallando el uso de munición disuasiva: 20 cartuchos 12 mm super sock", 10 granadas de mano, 20 cartuchos de 37 mm CS y 10 kilos de polvo CS. Al exhibírsele el documento, Rodríguez lo reconoció como el libro de novedades, identificando registros sobre su llegada a Plaza Baquedano cerca de las 8 de la noche para controlar desórdenes, el uso de gases, la concurrencia a Vicuña Mackenna por un bus quemado y las agresiones sufridas por carabineros.

Señaló que las anotaciones eran realizadas por el cabo Soto siguiendo sus instrucciones y que él posteriormente las visaba. Al ser consultado detalladamente sobre el contenido del libro, Rodríguez admitió que no aparecía ninguna mención específica a la concurrencia a Ramón Corvalán con Alameda, donde ocurrieron los hechos que terminaron con la lesión de Grandjean. Ante esto, explicó que el procedimiento habitual era consignar sólo los destinos principales a los que eran derivados, no necesariamente cada intersección específica, dado el caótico contexto en que se desarrollaban los hechos esa noche.

Considerando.

Primero. Que la prueba rendida en el juicio consistió en:

I) Declaraciones.

1. Testigo María Paz Grandjean Cárdenas, 49 años, víctima.

2. Testigo Gabriela Banderas Montalva, 47 años, actriz.
 3. Testigo Matías Acuña Valencia, artista.
 4. Testigo Juan pablo Miranda Navarro, 44 años, actor.
 5. Testigo Carolina Pinto Salas, 42 años, actriz.
 6. Perito Ana Lucía Toro Cepeda, 54 años, médica.
 7. Perito Pía Smok Vásquez, médica, DEMECRI – PDI.
 8. Perito Danae Sinclair, médica psiquiatra.
 9. Testigo Rodrigo Reyes Avilés, subprefecto PDI.
 10. Testigo Julio Parra Orellana, subcomisario PDI.
 11. Testigo Cristhoper Aguilar Ruiz, subcomisario PDI.
 12. Perito balístico Cecilia Sánchez Romero, LACRIM – PDI.
 13. Testigo Vivian Bustos Baquerizo, médico criminalista.
 14. Testigo Francisco Albanés Donoso, capitán de Carabineros.
 15. Testigo Camila Correa Cofré, cabo 1º de Carabineros, depto. De asuntos internos.
 16. Testigo Mauricio Rodríguez Rodríguez, funcionario de Carabineros en retiro, exsubdirector.
 17. Testigo Santiago Saldivia Parra, coronel de Carabineros.
 18. Testigo Enrique Monrás Álvarez, general director de orden y seguridad de Carabineros de Chile. (Presentado solo por la querellante víctima).
 19. Perito Pietro Sferrazza, docente en ciencias jurídicas. (Presentado solo por la querellante víctima).
- II. Documentos (numerados de acuerdo con el auto de apertura):
1. Oficio N°687 de 22-09-2020 de Zona Metropolitana de Carabineros a Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, suscrito por el General Inspector de Carabineros Mauricio Rodríguez Rodríguez, y sus documentos anexos, esto es:
 - a. Oficio N°789 de fecha 21 de septiembre de 2020 de la Zona de Carabineros Santiago Oeste a Fiscalía Regional Metropolitana Zona Centro, suscrito por General de Carabineros Enrique E. Monrás Álvarez.
 2. DAU Centro de Urgencia Ñuñoa de la víctima, de fecha 18 de octubre de 2019 a las 21:47:00 horas.
 3. Registro PROSERVIPOL Servicio Ariete del 18-10-2019 de la 28º Comisaría, anexo a Informe de Investigación N°291-2023 de DAICAR. Tripulación vehículo JS027.
 6. Hoja de Vida Institucional del acusado de 09-01-2023, anexa a Informe de Investigación N°291-2023 de DAICAR.

9. Oficio N°5477 de la Subsecretaría del Interior de fecha 9 de marzo de 2021, y sus documentos adjuntos:

f. Copia de Oficio N°33.922 de Ministerio del Interior y Seguridad Pública a Carabineros de Chile, de fecha 31 de octubre de 2019, suscrito por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gonzalo Blúmer Mac-Iver. Respondido por Oficio N°118, de Carabineros de Chile a Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrito por el General Director de Carabineros Mario Alberto Rozas Córdova. El cual adjunta el siguiente documento:

(1) Minuta N°7, de Dirección Derechos Humanos de Carabineros de Chile, con fecha 22 de noviembre de 2019, suscrito por el Capitán de Carabineros Pablo Maraboli Ulloa. (Presentado por querellante INDH)

m. Circular N°1832, de fecha 1 de marzo de 2019, sobre Instrucciones actualizadas del uso de la fuerza, suscrita por General Director de Carabineros

Mario Alberto Rozas Córdoba, y su publicación en el Diario Oficial el 4 de marzo de 2019.

n. Orden General N°2365 de fecha 1 de marzo de 2019, Protocolos para el mantenimiento del orden público, suscrita por General Director de Carabineros Mario Alberto Rozas Córdoba.

10. Copia de Libro de novedades de los servicios PTR-17 de Carabineros de Chile, del día 18 de octubre de 2019, suscrito por el Capitán Tomás Pablo Rodríguez Soriano.

13. Oficio N°19 de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad a Fiscalía Regional Metropolitana Zona Centro Norte de fecha 19 de julio de 2021, suscrito por General Inspector de Carabineros Esteban F. Díaz Urbina, y sus antecedentes adjuntos (Presentado por querellante INDH):

Especificación de Producto Combined Tactical System, del modelo N 2581 (12GA Super Sock Bean Bag).

Informe Técnico de Carabineros de Chile, de junio de 2016 denominado "Consideraciones técnicas, respecto del uso de munición menos letal para escopetas calibre 12 y carabinas calibre 37 mm cargo fiscal de Carabineros de Chile".

Ficha de características munición control de orden público.

15. Oficio N°257, de Secretaría General de Carabineros a Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, con fecha 25 de marzo del 2022, suscrito por General de Carabineros Pablo A. Silva Chamorro.

- Copia del Sumario Administrativo N°16039, dispuesto por la Prefectura de Control de Orden Público Oeste, foja 163 Evaluación de uso de escopeta; y foja 168 Resolución.

17. Certificado de Atención Médica de la víctima María Paz Grandjean Cárdenas, suscrito por la Doctora Carla Pellegrini Friedman.

19. Carta de servicios N°290 correspondiente al viernes 18-10-2019 de la Prefectura de FF.EE., proporcionada por la defensa del acusado.

20. Copia de Parte Denuncia N°11742 (Incorporada por la defensa)

III. Otros medios (ídem).

1. 9 fotografías contenidas en Informe Médico de Lesiones departamento de DD.HH. del Colegio Médico de Chile.

8. 4 imágenes contenidas en Informe Pericial Médico Criminalístico N°21 de 17 de marzo de 2021 de la perito Sra. Pía Smok Vásquez.

9. 9 fotografías de la víctima y sus lesiones. Anexo a Informe Pericial Médico Criminalístico N°21 de 17 de marzo de 2021 de la Perito Sra. Pía Smok Vásquez.

IV. Evidencia material.

1. Un disco compacto con registros audiovisuales proporcionados por la I. Municipalidad de Santiago, correspondientes a las Cámaras situadas en Alameda con Ramón Corvalán, ciudad Santiago, del día 18-10-2019.

2. Un disco compacto con respaldo de evidencia audio visual remitida a la

Policía de Investigaciones por el Testigo Matías Acuña Valencia.

Segundo. Que en la etapa intermedia las partes acordaron tener por acreditados los siguientes hechos a los que se debe atener el juicio oral conforme al artículo 275 del Código Procesal Penal:

1. Mediante Circular N°1.832 de 1° de marzo de 2019, vigente al 18 de octubre de 2019, la Dirección General de Carabineros actualizó instrucciones sobre uso de la fuerza, destinando el capítulo IV a regular lo que se denomina el uso diferenciado y gradual de la fuerza.

2. En la Circular N°1.832 de 1° de marzo de 2019, de la DGC se reconocen (al 18-10-2019), 5 niveles resistencia de una persona controlada, los que a su vez tienen 5 niveles de fuerza permitidos con intensidad progresiva y cuyo objetivo es vencer la resistencia o repeler la amenaza.

3. Al 18-10-2019 el armamento menos letal, conforme la circular N°1.832 de 1° de marzo de 2019, se reservaba a la época de los hechos, para el nivel de resistencia 4 esto es el de agresión activa.

4. Mediante Orden General N°2.635 de 1 de marzo de 2019, vigente al 18 de octubre de 2019, Carabineros aprobó el nuevo texto de los protocolos para el mantenimiento del orden público, los que fueron publicados en el D.O. de 4 de marzo de 2019.

5. Conforme la OG N°2.635 de 01-03-2019 (en su texto vigente al 18 de octubre de 2019), se diferencia entre manifestaciones lícitas e ilícitas, y a su vez, dentro de estas últimas, 2 subcategorías: Manifestaciones ilícitas violentas, y Manifestaciones ilícitas agresivas.

6. Conforme la OG N°2.635 de 01-03-2019 (en su texto vigente al 18 de octubre de 2019), las manifestaciones Ilícitas son violentas cuando se desatiende las instrucciones de la autoridad policial, y se afectan derechos de terceros, como por ejemplo la libre circulación vehicular, en tanto que se tornan agresivas cuando se generan daños, o se agrede intencionalmente a personas, incluyendo personal policial.

7. Conforme la OG N°2.635 de 01-03-2019 (en su texto vigente al 18 de octubre de 2019), se regula la escopeta antidisturbios con munición menos letal, sea esta última con cartucho de impacto (super sock) o cartucho con perdigón de goma, reservándose su utilización de manera exclusiva para el control de muchedumbres e individuos violentos.

8. De acuerdo a la OG N°2.635 de 01-03-2019 (en su texto vigente al 18 de Octubre de 2019), el uso de la EAD debe ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, y cuando el empleo de otros elementos sea insuficiente, o cuando esté en riesgo la integridad de terceros, de los propios manifestantes o de carabineros, y en todo caso, bajo circunstancias constitutivas de los niveles de resistencia 4 o 5 conforme la Circular N°1.832, (todo con arreglo al texto vigente al 18 de Octubre de 2019).

9. De acuerdo a la normativa interna de Carabineros, vigente al 18-10-2019 solo pueden hacer uso de la escopeta antidisturbios funcionarios debidamente certificados.

10. Al 18-10-2019 el acusado Tomás Pablo Rodríguez Soriano, ostentaba el grado de capitán de Carabineros.

11. Al viernes 18 de octubre de 2019 el acusado Tomás Pablo Rodríguez Soriano, se desempeñaba en la Prefectura De Fuerzas Especiales De Santiago, encontrándose de servicio.

12. El día 18-10-2019 el acusado Tomás Pablo Rodríguez Soriano el acusado cumplió funciones en el vehículo táctico J-027.

13. El día 18-10-2019 el acusado estaba al mando de la tripulación a bordo del vehículo táctico J-027.

Tercero. Que, como es lógico, este juicio dijo relación con la concreta participación que en los hechos contenidos en las acusaciones imputadas a Tomás Pablo Rodríguez Soriano, en cuanto funcionario de Carabineros en el desempeño de sus funciones y no a reproches a la institución a la que pertenece.

La valoración de la prueba debe partir de acuerdo con la normativa interna de la policía uniformada, vigente al 18 de octubre de 2019, el uso de la fuerza y el empleo de armamento menos letal, como las escopetas antidisturbios, estaba estrictamente regulado y restringido a situaciones específicas. La Circular N°1.832 de 2019 de la Dirección General de Carabineros establecía un uso diferenciado y gradual de la fuerza, reconociendo 5 niveles de resistencia y sus correspondientes niveles permitidos de fuerza con intensidad progresiva. Según esta normativa, el armamento menos letal se reservaba exclusivamente para casos de resistencia nivel 4, es decir, agresión activa.

Por su parte, la Orden General N°2.635 de 2019 aprobó los protocolos para el mantenimiento del orden público, distinguiendo entre manifestaciones lícitas, ilícitas violentas e ilícitas agresivas. Esta orden general especificaba que el uso de escopetas antidisturbios con munición menos letal se limitaba al control de muchedumbres e individuos violentos, y sólo cuando otros medios fueran insuficientes o existiera riesgo para la integridad de las personas, siempre bajo circunstancias de niveles de resistencia 4 o 5, según lo establecido en la Circular N°1.832.

Además, la normativa interna de Carabineros vigente al 18-10-2019 dictaba que únicamente los funcionarios debidamente certificados estaban autorizados para hacer uso de las escopetas antidisturbios. En el caso específico del acusado, Tomás Pablo Rodríguez Soriano, ostentaba el grado de capitán y se desempeñaba en la Prefectura de Fuerzas Especiales de Santiago cumpliendo funciones y al mando de la tripulación del vehículo táctico J-027.

Es decir, la normativa de Carabineros vigente al 18 de octubre de 2019 regulaba de manera clara y restrictiva el uso progresivo de la fuerza y el empleo de armamento menos letal en manifestaciones, limitándolo a casos de violencia o agresión activa y a cargo de personal debidamente certificado.

Cuarto. Que las partes no han discutido en lo sustancial la conducta imputada plasmada en el video registrado a través de una cámara de seguridad de la Municipalidad de Santiago. Esa evidencia abarca desde minutos

antes de la llegada del dispositivo policial dirigido por el acusado, hasta los instantes inmediatamente posteriores a la lesión sufrida por la víctima.

Esta prueba, capturada desde una cámara en altura, permitió apreciar en un plano general bastante completo la escena. Es posible distinguir el momento en que objetos contundentes son lanzados en contra del personal policial apostado en el lugar, así como los movimientos de los uniformados para repeler las agresiones. Asimismo, resulta bastante nítido al mostrar las acciones específicas realizadas por Rodríguez quien disparó con una escopeta antidisturbios en dos direcciones distintas y contra distintas personas cuando el temporizador de la grabación muestra las 19:54:29 y a las 19:56:32. Ahí queda registro del momento exacto en que el oficial a las 19:57:36 apunta y acciona la misma arma en contra de un manifestante y la recarga para efectuar un segundo disparo.

En el video se logra registrar la presencia de una serie de personas en el entorno de la zona donde se produjeron los disparos, ya sean manifestantes o transeúntes, lo que permite determinar el contexto general en el que se enmarcó el actuar policial.

La imagen no es lo suficientemente nítida como para distinguir con claridad las expresiones faciales y corporales de los manifestantes o de los propios funcionarios policiales. Se observa que en varios pasajes la visibilidad de las acciones queda obstaculizada parcialmente por la presencia de vehículos, semáforos, postes y árboles en un costado. Por cierto, el video, por su naturaleza, no cuenta con audio incorporado y permite apreciar los acontecimientos únicamente desde el ángulo específico en que fueron grabados por la cámara. En este caso, una toma frontal y elevada. Eso podría dejar fuera acciones o reacciones importantes que se desarrollaron fuera del encuadre o en ángulos muertos del lugar.

El relato de la víctima María Paz Grandjean Cárdenas la sitúa la tarde de ese 18 de octubre. La actriz señaló que luego de suspenderse la función de la obra en que participaba en el GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral), emprendió camino por la Alameda con la intención de tomar locomoción hacia su domicilio. En el trayecto, un carro lanza aguas de Carabineros le disparó chorros de agua y también a otros transeúntes que pasaban por el lugar. Ante esto, reconoce que gritó fuertes insultos a los carabineros, en un estado de ofuscación compartido por el resto de la gente.

Luego observó que carabineros se acercaban a unos estudiantes que estaban allí, lo que le provocó temor por la posibilidad que los agredieran. En ese contexto, mientras ella seguía gritando, un carabinero se le acercó

empuñando una escopeta, la que le apuntó directamente a su cabeza. Ante la inminencia de un disparo, giró instintivamente su cabeza hacia la izquierda, recibiendo un fuerte impacto en el lado derecho del rostro. Sufrió una herida con abundante sangrado, comenzó a hincharse y desfigurarse su cara.

Personas en el lugar intentaron prestarle auxilio y la instaron a buscar atención médica urgente. Aturdida y en shock, avanzó algunas cuerdas hasta que la encontró casualmente una amiga de la universidad, Gabriela Banderas, y luego un colega parte del elenco en que participaba, quienes la acompañaron y ayudaron a regresar a su domicilio en la comuna de Ñuñoa.

Se trasladó a un servicio de urgencia donde le indicaron que debía acudir a un recinto hospitalario para tratamiento de especialidad (traumatología) para descartar la existencia de fracturas en su rostro. No pudo concurrir de inmediato, pues no tenía certeza si contaba con la cobertura de salud necesaria por su trabajo a honorarios. En los días siguientes debió recurrir a cuidados particulares de su hermano médico y luego gestionar diversas atenciones y terapias para tratar su condición física y psicológica. Con el correr de los días el gran dolor fue disminuyendo lo mismo la desfiguración de su rostro, aunque presentaba grandes moretones en su cara y cuello que le impedían trabajar en su profesión que incluía cantar en la obra musical La Pérgola de las Flores que estaba en cartelera. El trauma le ha impedido retomar con normalidad su trabajo como actriz y la ha sumido en cuadros de estrés, insomnio, temor a salir a la calle. Incluso la llevó al quiebre de su matrimonio al no poder reincorporarse a la vida en pareja.

Por su posición no pudo ver con claridad al carabinero que le disparó, pero configura un sólido testimonio al dar cuenta de la agresión y de las secuelas que le ha provocado el hecho.

El testigo Matías Acuña Valencia señaló que el 18 de octubre de 2019, él y sus compañeros de escuela de danza se encontraban cerca de Plaza Baquedano luego de que suspendieran las clases por las manifestaciones. Vio una gran cantidad de carabineros actuando de manera muy agresiva, "como locos", disparando a los manifestantes. Los comparó con personajes de videojuegos disparando como "a los patos".

Vio que un vehículo blanco atropelló a una chica. Luego que a otra chica le llegó un disparo en la cara. Junto a otros la auxiliaron y llevaron a la entrada en un estacionamiento tras un McDonald's. La muchacha estaba desorientada, decía "qué me pasó, qué me pasó". Tenía una herida en la cara. La gente gritaba que había que llevarla a la posta.

Él grabó un video de la situación que subió a su cuenta de Instagram. En el video exhibido como evidencia N°2 se escucha exclamar: *"¡Hueón! Carabineros le acaba de tirar un perdigón en la cara a la chica. ¡Hijo de puta! Le llegó un perdigón en la cara. ¡Ahueonaos culiaos!"*. Se aprecia a la víctima herida en su rostro y a un grupo de personas a su lado, tránsito de vehículos por calle Doctor Ramón Corvalán y en la esquina gran cantidad de humo.

Tiempo después alguien lo contactó por Instagram para pedirle el video, diciéndole que la chica herida era una amiga. Ahí supo que se trataba de la actriz María Paz Grandjean.

Acuña fue testigo presencial, por lo que puede dar cuenta de manera directa del contexto de enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en que se enmarca la agresión a María Paz. Grabó un video que registra el momento inmediatamente posterior a los disparos, donde se ve a la víctima herida y se hace referencia a que le llegó un perdigón. Esto corrobora lo expuesto por la propia María Paz. Sin embargo, no vio directamente el momento preciso en que el proyectil alcanzó a la mujer, ni pudo individualizar al carabinero que realizó los disparos.

El testimonio de Gabriela Banderas Montalva corrobora el estado en que se encontraba María Paz Grandjean instantes después de ocurridos los hechos. Si bien no fue testigo presencial de la agresión, su encuentro fortuito con la víctima, a quien reconoció por ser su ex compañera de universidad, la convierte en uno de los primeros terceros que pueden dar cuenta de las lesiones sufridas por esta.

En su relato describe que María Paz estaba deambulando en evidente estado de shock, con una grave herida en su rostro sangrante y desfigurado, aturrida, sin comprender lo que le había ocurrido. Junto a otra amiga que la acompañaba, acudió a brindarle primeros auxilios, intentando contener la hemorragia. La ayudó a avanzar algunas cuadras por Vicuña Mackenna mientras buscaban cómo trasladarla a una posta o centro asistencial. Finalmente dejó a María Paz al cuidado de un colega actor de su compañía de teatro, quien se comprometió a trasladarla.

Si bien su testimonio no aporta detalles sobre las circunstancias precisas en que María Paz recibió el disparo, pues no fue testigo directo de aquello, sí contribuye a establecer que la lesión se produjo en el contexto temporal y espacial de la acusación y que provocó un daño grave, concordante con el impacto de proyectiles como los disparados por el arma del imputado.

El encuentro fortuito con la víctima descarta coordinación entre ellas y permite corroborar la necesidad de atención médica especializada y la

preocupación por eventuales secuelas, en sintonía con lo expuesto por la propia víctima sobre la entidad de su daño.

El testigo Juan Pablo Miranda Navarro señaló que el 18 de octubre también se encontraba en el GAM para una función de la obra "La Pérgola de las Flores" en que participaba junto a María Paz Grandjean y que debido a los incidentes la función se suspendió. Se fue y cuando caminaba por Vicuña Mackenna hacia su casa escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Al girarse, vio a María Paz acompañada de otras dos chicas. Venía con su cara muy desfigurada e hinchada, "como que se fuera a romper la piel de lo estirada", en estado de shock, lo que le impactó pues nunca la había visto así. Decidió acompañarla pues se veía muy frágil. Trató de comunicarse con la producción de la obra para ver cómo ayudarla. Caminaron tratando de tomar un taxi, pero había mucho tráfico y las calles estaban colapsadas. Durante el camino María Paz le contó que recibió el impacto de un proyectil de Carabineros. Finalmente lograron que un taxi se detuviera. Ahí se separaron, pues ella esperaba que una compañera de la casa la recibiera.

Sus dichos corroboran el estado en que se encontraba María Paz instantes después de ocurrido el incidente, con una grave lesión facial y en estado de conmoción.

La testigo Carolina Pinto Salas, señaló que era amiga y compañera de casa de María Paz Grandjean. Relató que el 18 de octubre alrededor de las 20 hrs. estaba en su domicilio preparándose para tomar once cuando recibió un llamado de María Paz. Le extrañó, pues a esa hora ella debía estar actuando en su obra. Pidió que la ayudara, diciéndole que había tenido un accidente y que cuando llegara a la casa la llevara a la posta. La esperó, pero no llegaba. Le pareció raro pues venía en taxi. Salió a la calle a buscarla y la encontró caminando. Venía con su cara totalmente desfigurada, en shock, casi no podía hablar. Le costó explicar lo que había pasado, sólo atinó a decirle que fueron los carabineros en la Alameda. Tenía mucho miedo.

La llevó a la posta, al SAPU de Ñuñoa. En el trayecto tuvieron problemas, mucha congestión, gente se les cruzó. En la posta la atendieron rápido, le hicieron curaciones, le dieron analgésicos y antibióticos, le dijeron que fuera al Hospital del Salvador, pero María Paz no quiso ir por temor a encontrarse con más carabineros. Volvieron a la casa y se encerraron.

En los días siguientes, María Paz estaba muy afectada, no quería salir a la calle. No era la misma persona de antes. Sentía miedo de vivir en un país donde había pasado esto. Tuvo que realizarse varios tratamientos médicos y

psicológicos. También tuvo problemas para retomar su trabajo como actriz debido a las secuelas.

Este testimonio da cuenta del estado físico (severamente herida en su rostro) y psicológico (shockeada, aterrada) en los instantes posteriores. Corroboró la versión de María Paz de haber sido agredida por disparos de carabineros, relato que escucha de la propia víctima esa misma noche. Aporta antecedentes relevantes sobre las primeras atenciones médicas que recibe María Paz y las consecuencias posteriores del trauma.

La perito Ana Lucía Toro Cepeda (médico, especialista en medicina legal), realizó un informe de lesiones a María Paz Grandjean el 25 de octubre de 2019, en el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico (COLMED). Presentaba una placa erosiva de 1 cm en la mejilla derecha cerca de la comisura bucal, rodeada de equimosis violáceas en la región peri orbitaria, malar, mandibular y cervical. No había fracturas ni luxaciones asociadas. El mecanismo descrito que las provocó fue un impacto de proyectil por parte de carabineros.

Tomó fotografías de las lesiones (exhibidas como Otros Medios [OM] 1) y concluyó que se trataba de un trauma maxilo facial compatible con el impacto de un objeto contundente y que la herida demoraría en sanar 1 o 2 semanas mientras que los hematomas desaparecerían en uno o dos meses.

La pericia fue realizada por una profesional con experiencia y formación específica en el tema (medicina legal con enfoque de derechos humanos).

La perito del Departamento de Medicina Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile (DEMECRI) Pía Smok Vásquez (médico, especialista en medicina legal), señaló que en febrero de 2021 emitió un informe a solicitud de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI para esta causa. Se le pidió informar sobre la naturaleza de las lesiones de María Paz Grandjean y su mecanismo de producción. Para realizar esa tarea contó con dos antecedentes: el informe de lesiones del COLMED y un set de 10 fotografías impresas que mostraban una secuencia evolutiva de las lesiones en el rostro de la víctima.

El informe del COLMED describía una herida contuso-erosiva en la región malar derecha, acompañada de aumento de volumen facial y equimosis peri orbitaria y cervical. No había fracturas según imágenes. El relato refería un impacto frontal con proyectil percutado por carabineros. Las fotografías evidenciaban una gran inflamación inicial con deformidad facial y equimosis restringidas, que luego daban paso a una disminución del edema y expansión gravitacional de las equimosis.

La perito estimó que este cuadro era compatible con una contusión por agente romo, no penetrante, de baja energía cinética, descartando proyectiles balísticos únicos o múltiples perdigones. Las lesiones evolucionaron hacia la resolución espontánea, configurando un carácter medicolegal leve.

Buscó establecer una correlación entre el tipo de lesiones y los medios disuasivos empleados por Carabineros en ese contexto, información que obtuvo a través de la Brigada de DDHH. Concluyó que el agente más concordante por forma, tamaño y profundidad lesional era una munición "super-sock", consistente en un saco de kevlar relleno con balines de plomo disparado por escopeta como proyectil de energía cinética que pretende golpear y que se debe utilizar para hacer blanco del tronco hacia abajo con el objeto de que la persona momentáneamente quede sin movimiento. Se utiliza cuando el sujeto es un peligro inminente conforme a su manual de uso y la opinión de Naciones Unidas sobre cómo no usarlos que adjuntó a su informe. Constituye un arma menos letal. Provocó en la víctima lesiones contusas y erosivas.

Incorporó en su pericia un esquema del rostro en donde indicó dirección del impacto y otro de la munición "Super Sock". En el primer caso, OM 8, se exhibió un croquis en donde se describe el punto de impacto y el ángulo de incidencia (direccionalidad de la lesión), de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba discretamente. En el segundo esquema se apreció la imagen de un cartucho muy similar al usado en escopetas calibre 12 mm y a su lado una bolsita de kevlar con perdigones tipo arenilla gruesa.

La perito afirmó que se trata de proyectiles de blanco individual.

Así mismo la perito hizo referencia a la exhibición de las fotografías de la víctima que tuvo a la vista para realizar su informe (OM 9) en donde se apreciaba la evolución en el tiempo de las lesiones, aunque estas no tenían ninguna fecha ni rótulo.

Este peritaje logra aproximarse al mecanismo causal más probable mediante un análisis que descarta otras hipótesis. Cabe mencionar que no tuvo acceso al video. Establece una correlación bien fundada entre el patrón de lesiones y un agente lesivo específico usado por Carabineros. Complementa sus conclusiones con información técnica sobre el funcionamiento de las municiones "Super Sock". Aunque sus observaciones sobre las lesiones se basan en registros e imágenes previas, no en un examen directo de la víctima sin constarle la data de las fotografías.

La perito Danae Sinclair Turo, médico psiquiatra, indicó que en marzo de 2023 realizó un informe de daño psicológico a María Paz Grandjean. Allí

describió que la evaluada presentaba sintomatología compatible con un Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) crónico. Los síntomas incluyeron reexperimentación intrusiva (flashbacks, pesadillas), evitación fóbica, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo (embotamiento afectivo) e hiperactivación autonómica. Durante la entrevista pericial evidenció signos de labilidad emocional, angustia al relatar los hechos y fenómenos disociativos, reviviendo vívidamente ciertos pasajes del trauma.

Este cuadro psicopatológico, en especial por la connotación social asociada a la lesión en su rostro, tuvo un impacto significativo en su funcionalidad laboral como actriz, así como en sus relaciones interpersonales.

La perito hizo referencia a elementos revictimizantes que habrían contribuido a la mantención de la sintomatología, como la exposición pública del caso y la negación inicial de los hechos por parte de Carabineros, lo que se condice con lo reportado por la literatura.

La experta afirmó que utilizó los lineamientos del Protocolo de Estambul como referencia técnica.

En síntesis, los tres peritajes médicos analizados muestran fortalezas metodológicas y aportan información relevante para el esclarecimiento de los hechos, desde sus respectivos ámbitos de competencia. En el plano de las lesiones físicas, los informes de las doctoras Toro y Smok son esencialmente concordantes, aunque hayan sido realizados en momentos distintos. Ambos logran establecer, mediante un análisis fundado, que el cuadro lesional facial de carácter contuso-erosivo que presentaba María Paz Grandjean sería compatible con el impacto de un proyectil disuasivo.

Esta conclusión se ve reforzada por la evidencia fotográfica que da cuenta de la evolución de las lesiones en el tiempo, elemento gráfico que otorga objetividad a las pericias. Si bien algunos aspectos técnicos de las fotografías usadas merecen reparos (por ejemplo, ausencia de data), así como el que no se hiciera un examen físico directo en el caso de Smok, tales debilidades no logran desvirtuar lo central de sus conclusiones.

Por su parte, el informe psiquiátrico de la perito Sinclair entrega una valiosa mirada complementaria a los efectos del hecho investigado, al evidenciar el severo impacto en la salud mental de la víctima que se tradujo en el desarrollo de un cuadro clínico de TEPT crónico. Su fuerza radica en la descripción de la sintomatología y en la explicación a la persistencia del daño en factores contextuales revictimizantes.

El Subprefecto de la PDI Rodrigo Reyes declaró sobre las diligencias realizadas en la investigación del caso. Mencionó que entrevistó a la víctima y

a un testigo, Matías Acuña Valencia, quien aportó un video donde se veía a María Paz lesionada. Reyes solicitó y analizó imágenes de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santiago que mostraban el momento en que María Paz fue impactada por un disparo realizado por el Capitán Tomás Rodríguez Soriano de Carabineros. Según su análisis, el Capitán Rodríguez realizó dos disparos con una escopeta antidisturbios, el primero dirigido a un manifestante y el segundo impactó a María Paz a una distancia de 16 metros aproximadamente conforme a la imagen planimétrica exhibida y que corresponde a OM 6 y a las fotografías del lugar OM 7. Señaló que el fabricante de la munición indicaba que el cartucho debe ser disparado a menos de 20 metros y siempre al tercio inferior.

Reyes también declaró haber solicitado información a Carabineros sobre los funcionarios involucrados y tomado declaración al Sargento Milton Soto, quien disparó una carabina lanza gases, pero éste dijo no tener conocimiento de que una persona resultó lesionada.

El Subcomisario de la PDI Julio Parra Orellana declaró que participó en la investigación del caso tomando declaración al Sargento Milton Soto de Carabineros, quien reconoció su presencia en el lugar de los hechos portando una carabina lanza gases, la cual dijo haber usado conforme al protocolo. A Parra también se le exhibió el documento 10 (libro de novedades).

El Subcomisario de la PDI Christopher Aguilar Ruiz señaló que realizó el análisis de un video de 9 segundos aportado por el testigo Matías Acuña, donde se observaba a la víctima María Paz Grandjean con una lesión evidente en su rostro y la vestimenta que llevaba. Aguilar elaboró un cuadro gráfico demostrativo de fotograma basado en el video de Acuña, OM 5.

Los documentos consistentes en:

- Documento 1: Oficio de Carabineros informando que no se desplegaron unidades de esa institución en el lugar y hora de los hechos.
- Documento 2: Dato de atención de urgencia que consigna las lesiones de la víctima María Paz Grandjean al ser atendida en un centro asistencial.
- Documento 3: Registro de servicio de Carabineros que identifica a los funcionarios Félix Leal, Tomás Rodríguez y Milton Soto como personal a cargo del vehículo policial en el lugar.
- Documento 6: Hoja de vida del Capitán Tomás Rodríguez que registra cursos sobre uso de escopeta antidisturbios.
- Documento 9M: Circular 1832 de Carabineros sobre uso de la fuerza y empleo de escopetas antidisturbios.

- Documento 9N: Orden General 2365 de Carabineros que aprueba protocolos para el mantenimiento del orden público.

- Documento 17: Certificado de atención médica de María Paz Grandjean que diagnostica secuelas de trauma facial y estrés postraumático.

- Documento 19: Hoja de servicio de Fuerzas Especiales de Carabineros que consigna al Capitán Tomás Rodríguez a cargo del vehículo policial desplegado el día de los hechos.

Estos aportaron información oficial sobre la atención médica de la víctima, la identidad y capacitación de los funcionarios policiales involucrados, los protocolos y normas que rigen el actuar de Carabineros en estas situaciones.

Cecilia Sánchez Romero, perito balístico de la Policía de Investigaciones de Chile, prestó declaración sobre las características de la munición antidisturbios denominada "Super Sock". Explicó que este tipo de munición corresponde a la categoría de "menos letal" y está compuesta por un proyectil que contiene una bolsa de material resistente (algodón y fibras balísticas) rellena con aproximadamente 1000 perdigones de plomo de 9 mm de diámetro, todo esto contenido dentro de un cartucho calibre 12. Realizó un diagrama del proyectil que se exhibió y que corresponde a OM 10.

El objetivo de esta munición, según indicó, es inmovilizar a la persona impactada sin causarle necesariamente un daño letal, ya que estos proyectiles tendrían un mayor poder de detención que de penetración. Para lograr este efecto, la munición "Super Sock" debe ser disparada a una distancia óptima de entre 5 y 20 metros, abarcando un área de impacto de unos 6 cm². Apoyó sus observaciones en el documento 13 b en el que se encuentran las especificaciones del producto Super Sock.

La perito advirtió que disparos dirigidos a la cabeza, especialmente a zonas como el cráneo y rostro, conllevan un alto riesgo de provocar lesiones graves como fracturas, hemorragias intra craneanas o daño ocular, las que potencialmente podrían resultar en la muerte de la persona afectada. Por esta razón diversos organismos internacionales desaconsejan dirigir disparos con esta munición hacia la mitad superior del cuerpo. Indicó también que la escopeta antidisturbios es un arma de puntería porque cuenta con una mira.

Esta declaración entregó información técnica sobre la composición, mecanismo de acción y uso previsto de la munición "Super Sock", permitiendo comprender sus características y potenciales efectos. Si bien describe el uso previsto de esta munición, no entrega mayores detalles sobre los protocolos

específicos de Carabineros para su empleo en contextos de mantenimiento del orden público.

La médico legista Vivian Bustos Baquerizo declaró haber participado en 2016-2017 en un análisis de los efectos provocados por munición menos letal en diferentes partes del cuerpo y a distintas distancias, con el fin de ilustrar los riesgos a monitores policiales que luego instruirían a personal operativo.

Según relató, en estas pruebas se efectuaron disparos con cartuchos "Super Sock" y otros a distancias progresivas de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 metros, evaluando el tipo de lesiones que podrían generar al impactar distintas zonas de una persona de complexión física y salud promedio.

Los resultados evidenciaron que disparos a menos de 20 metros dirigidos a la cabeza podrían provocar fracturas, hemorragias intra craneanas, pérdida ocular y daños cervicales, mientras a 25-30 metros aún existiría riesgo de hematomas y equimosis en cuero cabelludo. En tórax y abdomen habría riesgo de lesiones en órganos a menos de 20 metros, mientras en genitales podrían presentarse hematomas incluso a 30 metros. Los disparos a extremidades resultaron comparativamente menos riesgosos.

La experta recalcó que el objetivo declarado de este tipo de municiones es repeler ataques sin causar daño letal, por lo que teóricamente los disparos deben dirigirse de preferencia a las piernas y evitando impactos sobre la mitad superior del tronco.

El testimonio entrega un análisis pormenorizado de las lesiones esperables según la zona corporal afectada y la distancia de disparo, permitiendo valorar el riesgo concreto de daños graves. Confirma el objetivo declarado de estas municiones y el modo de empleo recomendado para minimizar daños, aspectos centrales para evaluar la proporcionalidad de su uso. No entrega información sobre el grado de difusión efectiva que tuvieron estos resultados al interior de Carabineros y su impacto concreto en la instrucción policial.

El capitán de Carabineros Francisco Albanés Donoso describió los cursos de capacitación en uso de escopeta antidisturbios que se impartieron durante 2019, mientras él se desempeñaba como jefe de la sección de docencia de Fuerzas Especiales. En estos cursos de dos a tres semanas se instruía a los alumnos a disparar hacia el tercio inferior del cuerpo, desde el abdomen hacia las extremidades, evitando zonas de mayor riesgo como cabeza, cuello y tórax. Para esto se les explicaba las distancias y se señalaba los potenciales efectos de los impactos. El Super Sock se podía direccionar, era un armamento de dirección no de precisión porque no tenía ánima; de hecho, había un módulo

del curso realizado por un armero donde se explicaba lo relacionado con la dirección.

También se les enseñaba sobre los distintos tipos de cartuchos disponibles. Los "Super Sock" contenían un solo proyectil de tela relleno con perdigones, mientras los "TEC" disparaban 12 postas de goma. Se advertía que la escopeta lanza proyectiles de manera imprecisa, por lo que se debe apuntar a una zona amplia y no a un punto específico. En todo caso, su uso se reservaba solo para situaciones de agresión activa que no pudieran controlarse con otros medios. Se sugería que la distancia fuera sobre los 25 metros.

La instrucción incluía una parte teórica con clases expositivas y una práctica con ejercicios de tiro donde los alumnos debían demostrar que podían emplear el arma de manera eficaz y segura en distintas posiciones y distancias. Especial atención se ponía en enseñar a dosificar adecuadamente la fuerza y cesar el fuego una vez neutralizada la amenaza.

Se practicaba con blancos en movimiento y a cargar bajo presión. Si la agresión cesa ya no puede utilizarse la escopeta antidisturbios. Esta munición se dejó de utilizar en las fuerzas especiales, destacando que el uso de la escopeta era siempre de carácter defensivo.

Este testimonio entrega de primera mano información sobre el contenido de las capacitaciones institucionales a personal operativo encargado del mantenimiento del orden público, como la recibida por el acusado. Confirma la existencia de protocolos y metodologías de instrucción orientadas a un uso gradual, subsidiario y proporcionado de estas armas. Detalla las zonas corporales donde se instruía dirigir y evitar disparos para reducir riesgos de lesiones graves, en concordancia con lo declarado por peritos. Da cuenta de la existencia de ejercicios prácticos destinados a asegurar que el personal domine el uso del arma en condiciones cercanas a la realidad. Al tratarse del responsable directo de las capacitaciones, podría tener un sesgo para minimizar posibles deficiencias en su implementación y resultados.

La declaración de Camila Correa Cofré en la que relató las conclusiones de una investigación interna sobre hechos ocurridos el 18/10/2019 en manifestaciones cerca de Plaza Italia. Señalando que los antecedentes recabados indican que, cerca de las 20 hrs., un piquete de Fuerzas Especiales se encontraba en Ramón Corvalán con Alameda repeliendo ataques de manifestantes violentos. Uno de ellos lanzó en al menos 3 ocasiones objetos contundentes contra el personal policial, ante lo cual un funcionario realizó 2 disparos sucesivos de escopeta antidisturbios en su contra, sin lograr alcanzarlo. El sujeto continuó lanzado proyectiles mientras se alejaba

corriendo, ante lo cual el funcionario realizó un tercer disparo, el cual, si bien no impactó al atacante, hirió a otro manifestante ubicado más atrás. Todo esto quedó registrado por cámaras del sector.

A pesar de lo anterior, no se encontró ninguna constancia, ya sea en las comunicaciones radiales o en los registros escritos, de que personal de Fuerzas Especiales haya reportado el procedimiento, la agresión sufrida ni el uso de escopeta con munición "Super Sock". El funcionario apuntado como responsable reconoció en una declaración administrativa haber percutado su arma para repeler el ataque, pero no dio cuenta de los disparos sucesivos ni de sus resultados.

El testimonio revela aparentes faltas en la omisión de reportar oportunamente el incidente y sus consecuencias a los mandos institucionales. La investigación, de que da cuenta, al ser realizada internamente por la misma institución, podría adolecer de sesgos u omisiones para proteger los intereses corporativos o de los funcionarios involucrados.

El general (R) Mauricio Rodríguez Rodríguez, exjefe de zona de Control de Orden Público de la Región Metropolitana, declaró sobre los protocolos institucionales para el registro de procedimientos policiales, en particular aquellos con uso de armamento. Señaló que, de acuerdo con la normativa vigente en 2019, el personal operativo debía reportar de inmediato a la Central de Comunicaciones (CENCO) cualquier intervención realizada durante su servicio, especialmente si se hacía uso de la fuerza. Esta constancia, informada vía radial, también debía quedar consignada en los libros de guardia y novedades de cada unidad policial. Además, al finalizar el turno, cada funcionario debía entregar un reporte escrito y detallado sobre sus actuaciones, el que luego era ingresado al sistema informático de la institución. En caso de haber utilizado armamento, debía confeccionarse un acta de consumo de munición señalando el contexto y consecuencias de su empleo.

Por otra parte, los jefes de unidad estaban obligados a revisar estos registros para detectar posibles omisiones o faltas a los protocolos de actuación. La ausencia injustificada de constancias sobre un hecho relevante, como disturbios que ameritaran el uso de escopetas, debía ser investigada y eventualmente sancionada.

Consultado por antecedentes de irregularidades durante el estallido social, el General Rodríguez indicó no tener información sobre hechos específicos, pero aseguró que frente a cualquier omisión de registro detectada se habrían adoptado las medidas administrativas correspondientes.

Este testigo, por su rango y función a la época de los hechos, tiene un conocimiento directo de los protocolos institucionales que debían seguir los funcionarios policiales. Confirma la existencia de una normativa clara que obligaba al personal a reportar y registrar oportunamente cualquier uso de la fuerza en procedimientos.

Su declaración se centra más en el "deber ser" establecido en los protocolos que, en el grado de cumplimiento efectivo de los mismos, especialmente en un contexto anormal como los acontecimientos producidos a nivel nacional a partir del 18 de octubre de 2019.

En su declaración también se da cuenta del documento 1, Oficio N°687 de 22-09-2020 de Zona Metropolitana de Carabineros a Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, particularmente en el informe de servicios del 18/10/2019 y del documento 13 b y c, Oficio N°19 de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad a Fiscalía Regional Metropolitana Zona Centro Norte de fecha 19 de julio de 2021.

En este último está la especificación de Producto Combined Tactical System, del modelo N 2581 (12GA Super Sock Bean Bag) que corresponde a una ficha técnica elaborada por el fabricante de la munición "Super Sock" (Combined Tactical Systems), donde se detallan sus características y consideraciones de uso. Allí se indica que este cartucho calibre 12 corresponde a una munición de impacto "menos letal", diseñada para ser disparada por una escopeta de cañón liso.

El informe Técnico de Carabineros de Chile, de junio de 2016 denominado "Consideraciones técnicas, respecto del uso de munición menos letal para escopetas calibre 12 y carabinas calibre 37 mm cargo fiscal de Carabineros de Chile", fechado en junio del 2016. En él se describe que el cartucho Super Sock calibre 12 contiene un proyectil de fibra balística rellena, diseñado para munición "menos letal" de impacto. Las propias mediciones prácticas allí establecidas señalan que a 15 metros de distancia (distancia más próxima al hecho investigado), el proyectil calibre 12 genera un impacto de aproximadamente 33.5 mm de diámetro y 21.8 mm de profundidad en el blanco de prueba. Exponiendo en una tabla las posibles lesiones provocadas a 15 metros de distancia en diferentes zonas del cuerpo, particularmente en la cabeza:

- Cabeza/cráneo: Hematomas, equimosis de cuero cabelludo, riesgo de hemorragia intra craneana en disparos sobre región de pabellones auriculares.
- Rostro: Riesgo de fractura de huesos delgados y prominentes, hematomas, equimosis y eventualmente heridas.

- Ojos: Trauma ocular severo, desde estallido a luxaciones de cristalino a erosiones corneales o de conjuntiva.

En sus conclusiones se asevera que:

"3.- Las interpretaciones de posibles lesiones, se realizaron por parte de la Médico Legista y Asesor Criminalístico de este Departamento Especializado Dra. Vivian Bustos Baquerizo, en conjunto con el perito balístico Capitán Luis F. Cabezas Guajardo, cuya tabla de lesiones se describe en el numeral 5.3.4.

5.- Luego de analizar los daños generados en la superficie de estudio, la cual tenía 10 mm de espesor, en todas las distancias de disparo (5, 10, 15, 20, 25 y 30 metros), es posible impactar el blanco mediante la utilización de los aparatos de puntería de las armas de fuego en estudio, asimismo, establecer que debido a la conformación del proyectil sub-pericia (saco y relleno), existe posibilidad de generar en la superficie corporal lesiones de diversa consideración, tomando en cuenta la zona corporal afectada y la distancia de disparo, sin embargo estas lesiones en su generalidad no causarían heridas con compromiso vital, siendo en su mayoría lesiones del tipo traumáticas con observación de equimosis y hematomas.

6.- En consecuencia, se sugiere que al efectuar disparos con este tipo de cartuchos, sean efectuados en trayectorias tensas, a partir de los 10 metros y sean dirigidos a extremidades superiores e inferiores, zonas en las que no se generaran mayores lesiones."

En resumen, impactos a 15 metros con este tipo de munición pueden causar lesiones considerables especialmente en zonas sensibles como cabeza, rostro y abdomen, por lo que se recomienda precaución, distancia y apuntar a extremidades.

La declaración de Santiago Rubén Saldivia Parra, coronel de Carabineros que se desempeñaba como prefecto de Fuerzas Especiales en octubre de 2019, explica la estructura operativa de la Prefectura, indicando que había dos subprefectos: uno a cargo de los servicios en terreno y otro de la planificación según la contingencia. Respecto a los hechos del 18 de octubre, señala que había una planificación de servicios ordinarios en ciertos puntos como el Palacio de La Moneda, pero no para los desórdenes posteriores que no estaban previstos. Indica que los arietes (vehículos de Fuerzas Especiales) se desplegaban por orden de la Central de Comunicaciones, de los subprefectos o de él mismo como prefecto, para intervenir donde ocurrían incidentes.

Consultado sobre un eventual despliegue en Ramón Corvalán con Alameda, manifiesta que no era un punto crítico con desórdenes habituales, por lo que no cree que se haya asignado, y si personal concurreó debió ser por

los desmanes que se iban produciendo. Añade que los equipos desplegados debían informar su ubicación por radio a la Central, lo que queda grabado, y luego registrar sus procedimientos.

Respecto al armamento, en 2019 disponían de escopetas antidisturbios, con municiones como balines de goma y Super Sock. Afirma que su uso debía registrarse luego del servicio, tanto de manera escrita como informando vía radial a la Central Gama. Esto debía consignarse en los libros de novedades de los equipos, o mediante actas circunstanciadas.

Sobre la munición Super Sock, cree que se utilizaba desde 2016-2017. No puede afirmar si dejó de emplearse después de 2019, pues ya no estaba en la Prefectura.

Consultado por un oficio de septiembre de 2020 que informaba que el 18 de octubre de 2019 no hubo despliegues en Ramón Corvalán con Alameda, señala que probablemente se refería a que no había nada planificado para ese lugar en particular, pero sí se produjeron despliegues por los desórdenes posteriores.

Explica el proceso de certificación del uso de escopetas, que era una instrucción práctica anual sobre su funcionamiento y el tipo de municiones. Confirma que en agosto de 2019 el capitán Rodríguez estaba en un listado de personal autorizado para usar escopeta, pero no recuerda si tenía calidad de instructor.

Precisa que el uso de escopeta está reservado para agresiones graves, no cuando el agresor cesa su actuar y se retira. Si bien el tirador puede direccionar hacia la zona del cuerpo que apunta, no es un arma de precisión absoluta. Lo correcto es disparar al tercio inferior, pues hacerlo al tercio superior conlleva riesgo de lesiones.

El declarante tiene conocimiento directo de los protocolos operativos de Fuerzas Especiales por su rol de prefecto al momento de los hechos. Detalla los deberes de registro de los equipos respecto a su ubicación, actuaciones y uso de armamento. Ratifica que la escopeta no es del todo precisa y su uso conlleva riesgos, por lo que hay instrucciones de disparar hacia las extremidades.

La querellante INDH incorporó y/o destacó los siguientes documentos:

Documento 1A: Oficio 687 de 22 de septiembre de 2020 en donde se informa que el 18 de octubre de 2019 no hubo despliegues en Ramón Corvalán con Alameda.

Documento 13: Oficio 19 de 19 de julio de 2021 de la Dirección Regional de Orden y Seguridad en donde se informa sobre munición Super Sock, fecha

de primera distribución (19 mayo 2017), ficha técnica del fabricante, e informe técnico de Carabineros sobre su uso.

Documento 15: Oficio 257 de 25 marzo 2022 de la Secretaría General de Carabineros mediante la cual remite sumario administrativo de 275 fojas. Destaca evaluación de uso de escopeta al Capitán Rodríguez (7 mayo 2019) y resolución que lo autoriza a usarla (21 agosto 2019); y actas circunstanciadas en fojas 160-161 en donde se detalla uso de munición de impacto por el Capitán Rodríguez el 18 de octubre contra manifestantes en el Metro Las Parcelas. Indican consumo de 20 cartuchos Super Sock y 30 cartuchos calibre 37mm.

La querellante Declaración de Enrique Eduardo Monras Álvarez (general de Carabineros):

La querellante representante de la víctima presentó la declaración del general de Carabineros Enrique Monrás Álvarez, quien se desempeñaba como jefe de zona Metropolitana Oeste entre octubre de 2019 y septiembre de 2020. En septiembre de 2020 firmó el Oficio 789 dirigido a la Fiscalía, que informaba que el 18 de octubre de 2019 no hubo despliegues policiales en Ramón Corvalán con Alameda (documento 1A). Explica que esa respuesta se elaboró recabando información de las diferentes unidades operativas, las que debían certificar que revisaron sus registros y no encontraron constancia de despliegues para ese día, hora y lugar.

Consultado por la falta de registros de un procedimiento en esa ubicación que sí ocurrió, indica que es una irregularidad que normalmente conllevaría una investigación administrativa. Detalla que todo despliegue con resultado de lesionados debiera generar constancias en los libros de guardia, novedades, hojas de ruta de vehículos, actas de consumo de munición, registros en la Central de Comunicaciones, entre otros.

Afirma que el 18 de octubre los equipos policiales se fueron desplegando de manera reactiva ante los diversos focos de desórdenes que se producían, por lo que no necesariamente todo estaba previamente planificado. Sin embargo, igualmente debió quedar algún registro de esos despliegues en el momento o al finalizar el servicio.

Ratifica que la obligación de registrar los procedimientos en los distintos libros y actas se mantiene incluso en despliegues no planificados. El funcionario a cargo siempre debe dar cuenta de su actuación, más aún si hay uso de armamento.

Confirma que en este caso en particular se inició un sumario por las irregularidades detectadas, pero desconoce en qué etapa se encuentra.

El declarante, por su rango y función, conoce de primera fuente los procedimientos para levantar información sobre servicios policiales realizados. Reconoce como una falta a los protocolos la inexistencia de registros de un despliegue que sí ocurrió y que tuvo como resultado una persona lesionada.

La misma interviniente presentó como prueba pericial los dichos de Pietro Sferrazza, académico experto en uso de la fuerza y derechos humanos, quien realizó un "peritaje" sobre el marco legal nacional e internacional aplicable a la munición Super Sock. Utilizó como fuentes tratados internacionales de DD.HH., normativas y estándares sobre uso de la fuerza, jurisprudencia, literatura médica y los manuales del fabricante.

Explicó que la munición es un proyectil de impacto cinético compuesto por numerosos perdigones de plomo dentro de una malla balística (llamado "bean bag"), que se dispara por una escopeta y tiene un alcance efectivo de 25 metros. El fabricante advierte no disparar al abdomen o extremidades, pues puede causar lesiones graves o la muerte.

Indicó que el derecho internacional establece principios generales para el uso de la fuerza (legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas), que son plenamente aplicables a este tipo de municiones. También existen estándares específicos de Naciones Unidas sobre "bean bags", que prohíben aquellos que contienen metal o múltiples postas, y que establecen que solo se deben usar como último recurso, disparando a las piernas.

Analizando la normativa chilena, señaló que la Orden General 2635 de Carabineros sí permite el uso de cartuchos Super Sock, entregando algunas directrices generales. Sin embargo, al autorizar municiones con perdigones metálicos que están proscritas por los estándares internacionales, existiría una infracción al principio de legalidad.

Respecto al caso concreto, estima que no se cumplió el principio de necesidad, pues no hubo agresión por parte de la víctima que justificara el uso de la escopeta. Tampoco se habrían respetado los protocolos de disparar sólo a las extremidades inferiores.

El marco teórico sobre la regulación internacional del uso de proyectiles de impacto cinético, los estándares que se deben cumplir y el análisis crítico de la normativa nacional sobre uso de escopetas antidisturbios, al tratarse de un análisis centrado en aspectos jurídicos, no es una propiamente un peritaje o prueba sobre los hechos, sino una opinión legal que está fuera de los alcances de lo que se debe acreditar en un juicio.

La defensa incorporó el documento 20, Parte Denuncia 11742 de 1ª Comisaría de Santiago, que da cuenta de una denuncia realizada el 20 de octubre de 2019 por Juan Carlos Vélez. Según relata, el 18 de octubre cerca de las 20 hrs., mientras conducía su vehículo por Alameda en dirección al oriente, a la altura de Ramón Corvalán, se encontró con gran cantidad de personas realizando desórdenes.

Estas personas comenzaron a lanzar piedras y otros objetos contundentes contra su auto, causándole daños y también lesiones al denunciante, que debió ser trasladado en silla de ruedas por transeúntes hasta un centro asistencial. En la posta del Hospital Alejandro del Río se constató que presentaba poli contusiones y hematomas de carácter leve.

Quinto. Que la prueba analizada y los hechos que las partes tuvieron por acreditados convencionalmente permiten retratar, en un análisis global, que frente a los disturbios producidos en la intersección de las calles Alameda y Ramón Corvalán, el 18 de octubre del 2019 después de las 18:50 horas, el oficial a cargo del dispositivo policial, el acusado Rodríguez, utilizó la escopeta antidisturbios con munición "Super Sock" la que apuntó de manera horizontal en ángulo recto, en forma inmediata y en distintas direcciones en una suerte de maniobra disuasiva general con múltiples blancos a su disposición, en palabras del testigo presencial Matías Acuña, "estaban como locos", como en el juego en donde se "cazan patos". Rodríguez fue el único que en ese dispositivo portaba y utilizaba esa arma en contra de los manifestantes, civiles que incluso se acercaron a él directamente a encararlo tras los primeros disparos.

Rodríguez, además de la jefatura que ostentaba, tenía capacitación suficiente para conocer el empleo adecuado del arma y sus riesgos solo menos letales que las convencionales. Razón por la que se insistía durante la instrucción en que se debía disparar hacia el tercio inferior del cuerpo del sujeto con la finalidad de golpearlo, e inmovilizarlo.

El propio acusado intentando exculparse en su declaración judicial dijo que realizó los disparos hacia abajo, al tercio medio inferior y sin perder la posición de tiro y preparando de manera inmediata, nuevamente efectuó un disparo hacia "estas personas" con la finalidad de poder reducir a una de ellas y lógicamente detenerla. Por cierto, no disparó hacia la zona inferior de los sujetos, ni hizo intentos por detener u ordenar hacerlo a persona alguna a la que dirigió los proyectiles, conforme pudo apreciarse claramente en los videos exhibidos. Tampoco consignó este uso repetido de la munición "antidisturbios" en los registros correspondientes, en contraste con el detalle que si efectuó al estampar -e incluso enmendar- el procedimiento inmediatamente anterior.

Ese último disparo, que se aprecia en la secuencia de video, fue el que terminó hiriendo a María Paz Grandjean a la altura de su rostro, por estar situada y erguida, a menos de 20 metros, en la línea de tiro en donde el capitán Rodríguez intentaba hacer blanco con un arma de fuego que por su naturaleza no es de precisión, conforme reiteradamente indicaron los testigos miembros y ex miembros de la propia institución y de la Policía de Investigaciones, así como la perito Pía Smok y Cecilia Sánchez y los documentos técnicos de la propia policía uniformada que guiaban su utilización y adiestramiento.

El hecho en sí no es discutido por las partes, la controversia se centró en la calificación jurídica del ilícito y de su sanción penal, la que incluso la defensa admite.

Sexto. Que el hecho punible que se dio por acreditado conforme a lo señalado consistió en que:

El 18 de octubre de 2019, poco antes de las 19:53 horas, el capitán de Carabineros Tomás Rodríguez Soriano llegó a la intersección de la Av. Alameda Libertador Bernardo O´Higgins con calle Doctor Ramón Corvalán a cargo de un dispositivo policial. A las 19:57 horas un manifestante se acercó corriendo para lanzar un objeto a los funcionarios, esa agresión fue respondida por Rodríguez Soriano disparando con la escopeta antidisturbios que portaba y percutando seguidamente un segundo tiro cuando el individuo se alejaba, impactando con el proyectil balístico "Super Sock" la cara de María Paz Grandjean. La distancia existente en ese instante entre González Soriano y Grandjean Cárdenas era de 16,24 metros.

A raíz de lo anterior María Paz Grandjean resultó con lesiones en su rostro consistentes en Trauma maxilofacial; hematoma malar y mandibular derecho; contusión maseterina, y herida en la región mandibular derecha de carácter menos grave.

Séptimo. Que los hechos descritos se encuadran dentro de la figura típica del delito de apremios ilegítimos contemplado en el artículo 150 D del Código Penal, en grado de consumado, toda vez que el empleado público Tomás Rodríguez Soriano, incumpliendo los reglamentos respectivos, actuó en el ejercicio de sus funciones aplicando apremios ilegítimos, ya que infligió intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves que no constituyen tortura.

Que para así decidirlo el tribunal tuvo presente la vinculación entre la conducta del imputado y el resultado lesivo en la víctima. Esta causalidad responde a los requisitos señalados en la teoría de la imputación objetiva del

comportamiento que es la tesis que congrega mayor aceptación en la doctrina actualmente.

La calidad de empleado público del imputado. El capitán Rodríguez Soriano era un funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones al momento de los hechos, cuestión que incluso fluye de las convenciones probatorias acordadas por las partes.

El incumplimiento de reglamentos. Al efectuar el disparo con la escopeta antidisturbios impactando a la víctima contravino los reglamentos institucionales vigentes sobre uso de la fuerza y empleo de ese tipo de armamento. No se daban los supuestos de agresión activa o violencia que justificaran su uso defensivo. Además, ese disparo y los anteriores, que el capitán realizó en el mismo lugar y en contra de otros sujetos, no fue dirigido al tercio inferior de sus cuerpos, como evidencia el impacto en el rostro de la víctima que se encontraba inmediatamente detrás del individuo al que Rodríguez pretendía alcanzar.

El uso de esta medida de fuerza fue desproporcionado, innecesario e injustificado en el contexto en que se encontraba. Alcanzó con sus efectos a una persona que no representaba una amenaza, ya que si bien los videos exhibidos dan cuenta de la existencia de diversos manifestantes ubicados en la intersección de las calles Ramón Corvalán y Alameda, momentos antes de la llegada al lugar de la policía, lo cierto es que al momento en que se produce el disparo que hiere a la víctima, la escasa cantidad de personas y particularmente la de una de ellas que arroja una piedra en dirección a los carabineros apostados en el lugar, no representaba una amenaza o nivel de peligro que habilitara al acusado a actuar como lo hizo.

El imputado creó un riesgo jurídicamente desaprobado. Al disparar un arma de fuego en esas circunstancias (sin justificación, al tercio superior de una persona y poniendo en riesgo a terceros), el capitán Rodríguez creó un riesgo jurídicamente desaprobado para la integridad física de María Paz Grandjean, excediendo el riesgo permitido para el uso de ese armamento que, aun etiquetado como menos letal, puede ocasionar lesiones de importancia e incluso causar la muerte, tal como fue referido a propósito de la prueba rendida en juicio.

La realización del riesgo en el resultado. Ese riesgo creado por la conducta abusiva del imputado se materializó en las lesiones sufridas por la víctima (trauma maxilofacial, hematoma, contusión, herida), existiendo un nexo causal directo entre el disparo y dichas lesiones.

El resultado lesivo es abarcado por el fin de protección de la norma. Los apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes que busca evitar el artículo 150 D del Código Penal incluyen claramente un disparo injustificado, a corta distancia, con un arma de fuego solo menos letal, dirigido contra la parte superior de las personas y aunque el golpe erró en el sujeto pasivo, cae dentro del ámbito de protección de dicha figura penal.

El delito de apremios ilegítimos no requiere ser realizado para obtener algún producto o para conseguir algún fin u objetivo, para castigar o para discriminar a la víctima. Menos aún para anular su personalidad, disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión. Esta es la diferencia fundamental con la definición del delito de tortura descrita en el artículo 150 A.

En este sentido si bien es una figura penal subsidiaria resulta completamente autónoma para el derecho nacional, con la salvedad de que la norma interpretativa que el inciso final del artículo 150 D prevé que, *"si los hechos constituyen algún delito o delitos de mayor gravedad, se estará a la pena señalada para ellos"*. Cuestión que a juicio del profesor Mario Durán Migliardi significa que el legislador adoptó una norma remedial preventiva ante posibles alegaciones por vulneración del principio de legalidad, interpretaciones erróneas del precepto o ante casos de falsos concursos de Leyes penales. Nociones para la interpretación y delimitación del nuevo delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes del profesor Mario Durán Migliardi (<https://orcid.org/0000-0002-8777-3131>), publicado en Revista de derecho (Coquimbo. En línea), vol. 27, 2020.

Octavo. Que, por lo dicho, se desestima la pretensión de la acusadora particular, representante de la víctima, de calificar los hechos como un concurso de delitos de tortura, lesiones simplemente graves y de disparos injustificados, atento el principio de especialidad de la tipicidad, en la cual no se subsume la conducta acreditada según la legislación penal vigente. Las lesiones simplemente graves tienen una pena menor que los apremios ilegítimos y los disparos injustificados regulados en la ley de control de armas constituyen ilícitos que el legislador previó para situaciones en donde los particulares hagan uso de armas de fuego en determinados eventos y no para la acción de las fuerzas armadas y de orden público.

Noveno. Que por la misma razón no se atenderá la solicitud de la defensa de encasillar la acción del acusado como un cuasidelito de lesiones. Un delito culposo no es lo acreditado en juicio atendido que el acusado estaba consciente de la peligrosidad de su conducta (disparar al tercio superior del cuerpo de una persona y en contra de la reglamentación sobre el uso de la

fuerza) y no obstante ello aceptó la producción de posibles resultados por no emplear el cuidado exigido en la gestión de su conducta.

También se desechó su alegación por la supuesta existencia de un vicio de congruencia en la acusación, pues el principio de congruencia protege sustancialmente la garantía compleja del debido proceso, en particular si se produce indefensión. En este caso no se discutió en torno a los hechos acontecidos gracias a las imágenes de video que muestran la secuencia completa de su acaecimiento. Las leves discordancias entre la prueba rendida y la acusación resultan meramente accidentales y no causan indefensión alguna.

Décimo. Que la participación culpable en el delito corresponde a título de autor ejecutor al acusado Tomás Rodríguez Soriano de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N°1 del mismo Código.

La prueba da cuenta de los signos externos y observables a través de las imágenes de video de que el acusado actuó con dolo eventual respecto del resultado lesivo ocasionado a María Paz Grandjean, dada la corta distancia, la visibilidad que tenía de la presencia de terceros y la falta de justificación para el disparo, cuestión incluso reconocida por el acusado. El capitán Rodríguez debió representarse el hecho típico como consecuencia posible de su actuar y aun así actuó aceptando esas posibles consecuencias: un altamente probable resultado lesivo en el sujeto al que apuntó a su tercio superior con un arma de baja precisión y, por ende, que la misma consecuencia también se podría producir en las otras personas que pudieren cruzarse en la línea de tiro.

No se trata de simple culpa como plantea la defensa, por cuanto dada la preparación previa del capitán Rodríguez Soriano es posible sostener que seriamente se representó la posibilidad de cometer el abuso y que se conformó o al menos resignó a él.

Rodríguez contaba con instrucción y experiencia; existían claros protocolos institucionales que describían suficientemente las reglas a las que estaba sometido su actuar; eran conocidas las características, alcances y limitaciones del arma antidisturbios menos letal; y el contexto concreto en el que el oficial la utilizó repetidamente en una pretendida disuasión general de los manifestantes mediante el castigo corporal a zonas de alto riesgo lesivo de algunos de ellos así lo indican.

Habría simplemente culpa, de acuerdo a la teoría ecléctica de la "conformidad", si la probabilidad del resultado lesivo hubiese sido menor o mínimo y su realización mostraría que el oficial confiaba en que no se

produciría. Tomado de Tatiana Vargas Pinto en Manual de Derecho Penal Práctico, Legal Publishing Chile, 2010, página 76.

Décimo Primero. Que se reconoce la circunstancia atenuante, no discutida por las partes, de irreproachable conducta anterior (artículo 11°6 del Código Penal), pues el acusado carece de condenas penales anteriores. Se desecha la pretensión de reconocer en su favor la minorante del artículo 11 N°9 consistente en el esclarecimiento sustancial de los hechos, por cuanto la omisión del registro administrativo de su actuación y su declaración en juicio negando que haber dirigido el arma hacia la parte superior y vital de los manifestantes desconoce los alcances de su conducta y los efectos que ella provocó.

Respecto de las agravantes de responsabilidad concomitantes al hecho punible del artículo 12 N°10 y 11 del Código Penal alegadas por la querellante representante de la víctima, esto es, “cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia” y “ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad”. Estas no tienen relación sustancial con el actuar de las fuerzas de orden público que serían aplicables al caso y, por lo tanto, se consideran como parte del contexto en que éstas realizaban su labor y en donde se circunscribe la actuación reprochada al acusado que justamente consiste en no ajustarse a los reglamentos, leyes y recomendaciones que velan porque el Estado y sus agentes sean respetuosos de los derechos y garantías inherentes a la dignidad humana.

Décimo Segundo. Que la determinación de la sanción debe basarse en la pena abstracta para el delito, que corresponde al presidio menor en su grado medio a máximo. Según el artículo 68 del Código Penal, con una circunstancia atenuante y ninguna agravante, no se debe aplicar el grado máximo. El tribunal determina la cuantía de la sanción en el límite superior dentro de ese tramo, considerando la extensión del daño causado a la víctima, una trabajadora de las artes escénicas. Estos daños, que según los testimonios y las pericias realizadas, son físicos, psicológicos y económicos, fueron resultado del impacto del proyectil disparado ostensiblemente por un funcionario estatal. Este proyectil cinético que hirió, inflamó y desfiguró su cara, según los informes técnicos previos de la propia policía uniformada, pudo generar incluso consecuencias mucho mayores.

Décimo Tercero. Que respecto a la forma de cumplimiento de la sanción el tribunal debe considerar los alcances de la ley N°18.216, en

particular, si es aplicable al caso en concreto la remisión condicional. La pena privativa de libertad no excede de tres años. El penado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito conforme a su extracto de filiación. Sus antecedentes personales reflejados en el informe pericial presentencial favorable acompañado por su defensa y la naturaleza del delito permiten presumir que no volverá a delinquir. Las circunstancias indicadas permiten sostener que es innecesaria una intervención o la ejecución efectiva de la pena.

El requisito negativo consistente en la imposibilidad de proceder con esta facultad respecto de los autores de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º y en el artículo 3º de la ley N°17.798 debe ser interpretado sistemática y coordinadamente con lo dispuesto en el artículo 17 B de la ley de control de armas.

Allí se establece una regla especial que resuelve hipótesis concursales: *“Las penas por los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando las armas o elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º y en el artículo 3º, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal”.*

En el caso en comento no se ha sancionado la conducta como infractora de la ley de armas, por lo que no opera a su respecto la restricción aludida. No existe una situación de concurso de delitos que resolver a través de la ley especial indicada.

Cumpléndose los requisitos legales el tribunal hará lugar a la sustitución de la pena privativa de libertad, confiando en que el efecto simbólico de esta condena y su condicionado periodo de control pueden ayudar al condenado, a la víctima y a la sociedad a reencontrarse y comenzar a sanar lo que el delito fracturó.

Décimo Cuarto. Que, conforme a la certificación de la unidad de causas del tribunal, el acusado Tomás Pablo Rodríguez Soriano, desde el 27 de abril de 2021 estuvo sujeto a la medida cautelar del artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal, arresto domiciliario nocturno de 8 horas, (desde las 22:00 a las 6:00 horas). Medida que fue suspendida durante los días 04, 05, 06, 07 y 08 de septiembre de 2023. Cuenta entonces con 1081 noches lo que representa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 348 inciso 2º del Código Procesal Penal un abono total de 721 días.

Y visto lo dispuesto en los artículos 1, 11 N°6, 15 N°1, 30, 68 y 150 D del Código Penal; 282 y siguientes del Código Procesal Penal; y ley N°18.216; se declara:

1. Que se condena a Tomás Rodríguez Soriano como autor de un delito de apremios ilegítimos, en grado de consumado, cometido en esta ciudad el 18 de octubre de 2019, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, sin costas.

2. Que se sustituye la pena privativa de libertad por igual tiempo remisión condicional, con un tiempo mínimo de observación de un año si el abono correspondiente arrojará un tiempo menor de cumplimiento. Se establece, por lo tanto, la observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa bajo las siguientes condiciones:

- a. Residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesto por el condenado.
- b. Sujeción al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile.

Se ordena oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación para los efectos del artículo 38 de la ley N°18.216.-

3. Que se abona para cumplir la pena impuesta 721 días hasta esta fecha inclusive.

Redactada por Cristián Soto G.

Dictada por la sala integrada por los jueces Erick Aravena Ibarra, Valeria Vega Sepúlveda y Cristián Soto Galdames, la segunda titular destinada a estas funciones, los restantes titulares del tribunal.